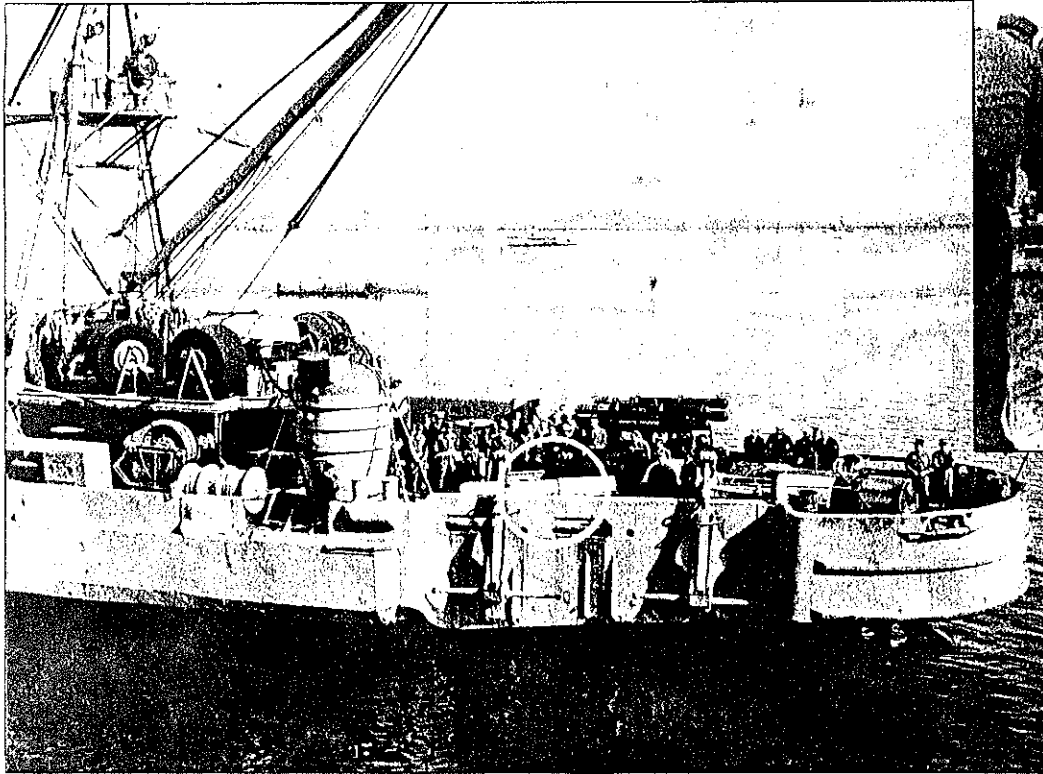


# Palomares, veinte años después



El día "D" y la hora "H" para la tranquila población de Palomares, situada en el sudeste peninsular, a 100 kilómetros de Almería y a unos 120 de Murcia, fue el 17 de enero de 1966, a las 10.20 de la mañana. Un "B-52" perteneciente al ala 68 de la base Seymour Johnson (Carolina del Norte), y un avión "KC-135", nodriza, del escuadrón de aprovisionamiento de la Base de Bergstrom (Texas), estacionado en Morón, se incendiaron mientras efectuaban la operación de repostar a 9.500 metros de altura. Sus restos cayeron dispersados sobre un diámetro de más de 10 kilómetros.

El "B-52", en vuelo de alerta permanente sobre el Mediterráneo, el Atlántico y el Pacífico, con cuatro bombas de hidrógeno —cada una con un poder destructivo de 1,5 megatonas—, realizaba la misma operación diariamente desde 1953, año en el que Estados Unidos y España firmaron sus primeros acuerdos militares.

En el siniestro perecieron 7 de los 11 tripulantes de los dos aviones. Sus cuerpos caerían mezclados con los artefactos atómicos, supervivientes y fragmentos de fuselajes, sin que se registrara una sola víctima entre la población. Tres de las bombas fueron localizadas en tierra. La cuarta, perdida en el mar, no sería recuperada hasta unos tres meses más tarde —concretamente el día 7 de abril a las 8.40 horas de la mañana—, tras una intensa y minuciosa búsqueda, en la que el marinero de un pesquero tarraconense, afincado en Aguilas (Murcia), Francisco Simó Orts, que ya sería conocido en adelante por "Paco el de la bomba", superó a los sistemas de inmersión entonces tan avanzados como los batiscafos "Alving" y "Aluminaud".

## La radiactividad

Aunque el riesgo de una explosión atómica estuvo descartado, la radiactividad suponía una seria amenaza para la población en general y, de manera especial, para las personas de la comarca que, ajenas a la naturaleza de los materiales caídos del cielo, estuvieron en contacto durante las primeras horas con los tres artefactos localizados en tierra, en los que, a consecuencia de la fuerte colisión, se produjeron algunas fisuras por las que manaba plutonio radiactivo.

Los trabajos de limpieza y rescate fueron simultáneos. Cientos de soldados estadounidenses, dotados con detectores, "peinaron"



todos los campos de Palomares. Las cosechas de tomates tempranos, que constituían la principal riqueza de la zona, fueron arrancadas y quemadas y más de 1.100 toneladas de tierra contaminada, en 4.479 bidones azules, cerrados herméticamente, fueron embarcadas para ser depositadas en un cementerio atómico del desierto de Texas.

Veinte años después, esta pesadilla ha dado lo que podrían ser ya sus últimos coletazos. Tras las reivindicaciones de un sector del vecindario, fundamentadas en la presunta contaminación de la zona, el caso parece haberse empezado a cerrar a nivel oficial con la reciente entrega de los historiales clínicos a los vecinos de Palomares que se han desplazado a Madrid durante estos dos decenios, para ser reconocidos por los médicos de la Junta de Energía Nuclear. El subdirector general de este organismo, Alberto Rodrigo, y el director del Instituto de Protección Radiológica y Medio Ambiente, Francisco Mingot, que se desplazaron a Palomares a principios del pasado mes de noviembre para proceder a la entrega de los citados historiales, garantizaron a los habitantes de la zona la ausencia de radiactividad.

## La tesis oficial

Según el informe redactado por la Junta de Energía Nuclear, "desde el año 1966 se ha llevado a cabo



La alcaldesa de Palomares (que aparece en la foto inferior junto a José Bigas, de Greenpeace, a la salida de la embajada norteamericana) continúa reclamando a los Estados Unidos por los perjuicios causados por las bombas de hidrógeno caídas hoy hace veinte años. En la

foto superior, la bomba a bordo del buque "Petrel", tras ser rescatada. En el centro, un técnico comprueba los índices de radiactividad de una ternera, un año después del accidente. Sobre estas líneas, el general norteamericano Walters confraterniza con los vecinos de Palomares

un programa de vigilancia radiológica de la zona y de control de personal, con objeto de conocer y seguir la evolución del riesgo. En este programa, hasta la fecha se han analizado 2.160 muestras del suelo, se han tomado medidas diarias del aire en varios puntos, se ha analizado la vegetación cultivada y silvestre, y se han realizado 1.270 reconocimientos médicos a 570 personas, completándose con exploraciones realizadas en el Hospital Clínico y por diversos médicos especialistas".

Los resultados de estos estudios, relacionados con la legislación vigente y con la radiactividad natural existente, han permitido llegar a la conclusión, según se indica en el informe de la JEN, de que "en el aire de Palomares, el contenido medio de plutonio es cien veces inferior a la concentración límite establecida por la legislación española", y que "la dosis media de radiación en la población, debida a la contaminación, equivale al 3 por ciento de la que recibe del medio natural en que viven".

La alcaldesa de Palomares, Antonia Flores, explica que "la caída de las bombas nos hizo mucho daño. Hace veinte años, Palomares tenía 1.200 habitantes y hoy tan sólo 800. Seguimos cultivando el tomate y hasta el año pasado no tuvimos agua corriente en las casas".

La alcaldesa continúa afirmando: "Somos conscientes de que he-

mos sido engañados. Incluso la Junta de Energía Nuclear nos ha tratado insuficientemente, inadecuadamente e irresponsablemente durante estos veinte años". Sin embargo, la alcaldesa socialista reconoce que este no es el momento más oportuno para remover nada que huela a nuclear... por aquello de la OTAN.

## Reclamaciones

Las reclamaciones de indemnización expiran a los 20 años del siniestro. Sin embargo, Antonia Flores pedía ayer que la Administración española reconociera "la posibilidad de que resultemos afectados por la contaminación radiactiva, al estar sometidos al riesgo de daños nucleares".

Asimismo, el miembro de la junta directiva de Greenpeace en España denunció a la Junta de Energía Nuclear que "durante estos veinte años ha politizado el tema y lo ha convertido en un asunto lleno de interrogantes" y el miembro de su junta directiva, Jordi Ribas, denunció que los informes que la Junta de Energía Nuclear ha realizado durante estos años están "incompletos e llenos de errores". Tanto Greenpeace como el pueblo de Palomares han pedido la creación de una comisión de investigación, compuesta por científicos, para que lleven a cabo las oportunas investigaciones sobre el terreno.